

Laura Gamboa Gutiérrez

~~Facultad de Ciencias Humanas~~

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia

lauragamboag@yahoo.com

“Ni una sola mata de coca”¹: Las políticas de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia (1998- 2002)

INTRODUCCIÓN

La estrategia de erradicación de cultivos ilícitos juega y ha jugado un papel fundamental en la lucha contra las drogas en Colombia. Ésta es clave en las políticas nacionales e internacionales del país puesto que, en su gran mayoría, éstas giran alrededor del narcotráfico como supuesta causa de todos los males que nos aquejan y fuente de su solución.

Su objetivo, basado en la idea de que se puede eliminar el tráfico de drogas acabando con la oferta de las sustancias ilícitas, consiste en desaparecer todas las matas de coca, amapola y marihuana del territorio nacional en el menor tiempo posible.

Para lograrlo, el gobierno nacional, impulsado y financiado por Estados Unidos, ha enfocado sus esfuerzos en las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos con herbicidas como el Glifosato, reservando una muy pequeña parte de los recursos para el desarrollo alternativo (erradicación manual a cambio de la financiación de nuevos cultivos e infraestructura para su comercialización), básico en aquellas regiones donde los cultivos tradicionales no constituyen una opción de supervivencia.

No obstante, a pesar del dinero invertido los resultados no han sido muy alentadores. Los cultivos de coca y amapola, lejos de desaparecer han aumentado a lo largo y ancho del país, al igual que los precios de la cocaína y la heroína en los mercados internacionales. La calidad de las sustancias ha mejorado, los consumidores se han incrementado y el negocio de la droga no sólo sigue existiendo sino que va “viento en popa”.

Adicionalmente, las fumigaciones han generado varias denuncias por parte de diferentes sectores de la sociedad, acerca de daños al medio ambiente, cultivos de pan coger y hasta la salud de los habitantes expuestos a las mismas. La estrategia de desarrollo alternativo por otra parte ha sido insuficiente; además de no abarcar el territorio requerido, ésta carece de la planeación y los recursos necesarios para llevar a cabo su labor, lo cual ha permitido proyectos inútiles, el rompimiento de los pactos de erradicación por ambas partes y problemas de manejo de fondos.

Es clara la ausencia de una visión global y real de la situación. La falta de soporte de la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos en un estudio coherente que evalúe objetivamente las razones que fomentan y mantienen dichas plantaciones en el país hace evidente el carácter coyuntural de la misma. Ésta pareciera no obedecer al objetivo inicialmente planteado sino adaptarse a las exigencias norteamericanas, la política y economía nacional y conceptos culturales nacionales e internacionales.

Esto se refleja a lo largo del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). La implementación del Plan Colombia y el lento fracaso del proceso de paz con las FARC-EP², fueron los factores claves en la definición de ésta política que cada vez se apoya más en las fumigaciones.

Esta ponencia se centra en esos últimos años y pretende hacer un seguimiento de ésta estrategia, durante dicho período, buscando explicar su persistencia. Por medio de la revisión de dos diarios de circulación nacional (El Tiempo y El Espectador) y bibliografía acerca del tema, aspira un examen de las condiciones que han rodeado su definición y evitado que se analicen opciones más adecuadas a la situación nacional.

LA POLÍTICA

La política de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia tiene dos componentes: uno de erradicación forzosa, fumigaciones aéreas con herbicidas, y otro de erradicación manual pactada utilizando planes de desarrollo alternativo. En teoría, la primera de ellas se usa con cultivos industriales (cultivos mayores de 3 hectáreas cuando son de coca y 2.5 cuando son de amapola, que están financiados por el narcotráfico y organizados empresarialmente con mano de obra contratada), y la segunda en el caso de cultivos de

¹ “Ni una sola mata de coca en el Putumayo” Fernando Londoño, Ministro del Interior.

subsistencia (cultivos de 3 hectáreas o menos cuando son de coca y 2.5 cuando son de amapola, cultivados directamente por indígenas o campesinos quienes utilizan dicha producción como actividad complementaria de subsistencia).

De esta forma, se supone, se descriminaliza y ayuda al pequeño productor y se castiga al narcotraficante reconociendo así la situación precaria y marginal de varias regiones del país en donde hay poca o nula presencia estatal, niveles muy bajos de infraestructura básica y una situación de violencia inmanejable, que obliga a los habitantes de allí, generalmente colonos que llegaron a esas tierras desplazados de las propias, a cultivar coca y amapola para sobrevivir. La ventaja de dichos cultivos, más que su remuneración, es su fácil comercialización y segura venta y financiación.

Basados en esa teoría, los planes de desarrollo alternativo, manejados desde 1996 por el Plante³, buscan brindarle alternativas de sustitución a los campesinos, de manera que puedan desvincularse del negocio sin perder su medio de subsistencia. La idea, que inicialmente consistía en financiar los nuevos cultivos lícitos a cambio de la erradicación de los ilícitos, hoy se trata de un plan, más parecido al Plan de Desarrollo Nacional. Con él se busca llevar a las regiones vinculadas a la siembra de coca y amapola: infraestructura, servicios básicos, propuestas de financiación, industrialización y comercialización de los nuevos cultivos, así como capacitación técnica para formar empresas y cooperativas.

El Plante, sin embargo, tiene serios problemas que han limitado su campo de acción. Por un lado están los inconvenientes monetarios, pues a pesar de que las ayudas aumentaron durante el gobierno del presidente Pastrana, el dinero con que cuenta la institución es muy poco para la tarea, que le toca llevar a cabo; esto por supuesto implica que su cobertura, a pesar de la expansión y movilidad de los cultivos, se limita a 96 municipios en 10 departamentos del país cuando existen alrededor de 23 departamentos involucrados.

Por otro lado existen problemas de planificación: si bien el Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo por diversificar los productos para la sustitución, de manera que resulten rentables y duraderos, la verdad es que la mayoría de ellos se encuentran con problemas de comercialización, producción o sostenibilidad ambiental, puesto que los proyectos se

² Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular

han manejado individualmente sin tener en cuenta a la comunidad afectada, el territorio tratado o el panorama económico nacional e internacional, en donde generalmente no caben. Eso sin contar con que regiones como el Amazonas, la Orinoquía y el Macizo Colombiano, en donde se encuentran gran parte de los cultivos, son tierras frágiles, que no están diseñadas para cultivar. Su función es mantener recursos biológicos inapreciables, razón por la cual sus suelos no cuentan con los nutrientes suficientes para soportar siembras lícitas, motivo por el que las cosechas de las mismas, si se dan, no producen tanto ni de tan buena calidad como otras, ubicadas en mejores regiones del país.

Adicionalmente existen problemas de control estatal: las regiones mencionadas anteriormente se han caracterizado por ser sectores olvidados de la nación, y en muchas de ellas grupos guerrilleros o paramilitares tienen el control, lo que dificulta la entrada de los funcionarios del Plante.

En últimas es claro que si bien se tienen buenas intenciones, por así decirlo, la realidad es que la situación de pobreza, mala distribución de la tierra, marginalidad y violencia son tan críticas y las soluciones dadas tan circunstanciales, que es muy difícil que se logre algo, fuera de algunos éxitos aislados.

LAS FUMIGACIONES ANTES DEL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA⁴

La discusión de la erradicación de cultivos ilícitos por medio la aspersion aérea de herbicidas en Colombia inició en los años setentas, debido a la gran producción nacional de marihuana. A lo largo de la década Estados Unidos presionó para que se fumigara con el herbicida *Paraquat*, como se había hecho anteriormente en México, con nefastos resultados; esto destapó la discusión a nivel nacional. Aunque finalmente no se autorizó el programa de fumigación, sí se hicieron algunos experimentos con dicho herbicida en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En 1984, ante la escalada narcoterrorista en el país, el presidente Belisario Betancur (1982-1986), endureció su posición contra las drogas, permitiendo la aspersion aérea con

³ Programa de Desarrollo Alternativo de Colombia creado en el gobierno de Ernesto Samper (1996-1998)

⁴ Basado en Tokatlian, Juan Gabriel. "Política antidrogas de Estados Unidos y cultivos ilícitos en Colombia". Análisis Político, Instituto de Estudios Políticos y relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. No 35, Septiembre-Diciembre 1998.

Glifosato en el mismo lugar⁵. De esa forma se erradicaron 12.000 hectáreas de marihuana con aparentes buenos resultados. No obstante, al igual que había sucedido en México años antes, los cultivos simplemente se trasladaron a otros sectores y para 1988 Colombia volvió a ser nuevamente la primera exportadora de la hierba.

Paralelamente en 1985, se decidió iniciar la fumigación de los cultivos de coca con un herbicida llamado Garlon – 4 el cual, debido a sus efectos y la negativa de su fabricante para seguir distribuyéndolo, fue descontinuado un año después, cuando subió a la presidencia Virgilio Barco (1986-1990). Durante su gobierno, al igual que el de su sucesor Cesar Gaviria (1990-1994), las aspersiones aéreas descendieron debido mayormente a que el enfoque de la lucha contra las drogas se desvió hacia los grandes carteles que manejaban el negocio; el dinero y cualquier otro esfuerzo se puso en la persecución de los grandes capos y sus operaciones.

Esto continuó durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), aunque debido al boom de la amapola desde 1991 y el continuo crecimiento de los cultivos de coca desde los ochentas, esta vez se hizo más énfasis en la fumigación. Vale la pena mencionar que durante este período la lucha contra las drogas en el ámbito de la producción se radicalizó debido principalmente a la crisis política desatada por los aportes hechos por el Cartel de Cali a la campaña presidencial de Samper. Éstos no sólo desencadenaron el Proceso 8.000⁶ sino que generaron una gran desconfianza, nacional e internacional, hacia el gobierno, lo que le quitó margen de maniobra agudizando problemas socioeconómicos que se venían gestando de períodos anteriores.

En su intento por mantenerse en el poder y ganar legitimidad interna, pero sobretodo externa (Colombia fue descertificada en su lucha antidrogas por el gobierno norteamericano, en 1996 y 1997) Samper reforzó como nunca antes los esfuerzos contra las drogas, aumentando notablemente las fumigaciones aéreas, no sólo en cantidad sino también en intensidad (además del uso del Glifosato, se ensayó también el Imazapyr y se proyectó el uso del Tebithiurón, ambos herbicidas agropecuarios). El número de hectáreas fumigadas durante su período creció asombrosamente, alcanzando cifras

⁵ Para 1981 se había derogado en Estados Unidos la Enmienda Percy, que prohibía el uso de recursos federales para la aplicación en el extranjero de herbicidas prohibidos domésticamente.

⁶ Investigación por la infiltración de dineros del Cartel de Cali en las campañas de congresistas y candidatos presidenciales de 1994.

récord⁷, lo que, sin embargo, no impidió que los cultivos de coca aumentaran sustancialmente⁸ (los cultivos de amapola irían disminuyendo hasta llegar a ser 6.500 hectáreas en 1995, cifra alrededor de la cual han girado en los últimos años).

La intensificación en las fumigaciones detonó el descontento general en las marchas cocaleras de 1996, donde se articularon quejas campesinas como la destrucción de cultivos de pancoger, daños a la salud y pérdida del sustento familiar. Dichas marchas terminaron en una serie de pactos de erradicación manual con los habitantes del sur del país, especialmente los de Caquetá. En ese momento, como diría Tokatlian:

*“Colombia, perpleja y tardíamente, descubrió que había dejado de ser procesador de sustancias psicoactivas y se había transformado en productor de cultivos ilegales, que el estado no existía en una proporción estratégica del territorio nacional y de que el poder regional lo ejercían los grupos insurgentes (en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC) y que la violencia no podría resolver el entramado de problemas sociales, políticos y económicos de fondo que se habían encubado por décadas en ese espacio geográfico de la nación”*⁹

El aumento de los cultivos de coca a lo largo de éste período preocupó al gobierno norteamericano, que propuso alrededor de marzo de 1998, el uso del Tebuthiurón. Ante la polémica desatada entre las autoridades antinarcóticos, científicos, académicos, ambientalistas y especialistas estadounidenses, el gobierno colombiano decidió dejar el herbicida en período de prueba, al igual que el Imazapyr, y empezar la preparación de un Plan de Manejo Ambiental para las aspersiones con Glifosato.

DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS

DURANTE EL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA

A lo largo del primer semestre de 1998, Andrés Pastrana, candidato presidencial para el período 1998-2002, hizo fuertes esfuerzos por enfatizar en el carácter integral que iba a

⁷ Mientras en 1994 se fumigaron 3.871 hectáreas de coca y 3.537 de amapola, en 1997 se fumigaron 41.860,60 y 6.988,20 hectáreas respectivamente. Datos tomados de Presidencia de la República. La lucha de Colombia contra las drogas: acciones y resultados 2001. Bogotá : Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección Nacional de Estupefacientes, 2002. Pg. 22 - 23

⁸ De 45.000 hectáreas en 1994 a 79.500 en 1997. Datos tomados de Presidencia de la República. Op.Cit. Pg. 22 - 23

⁹ Tokatlian, Juan Gabriel. “Política antidrogas de Estados Unidos y cultivos ilícitos en Colombia”. Análisis Político, Instituto de Estudios Políticos y relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. No 35, Septiembre-Diciembre 1998. Pg 65

tener su política contra las drogas; según aseguró en una de sus entrevistas¹⁰, al igual que en varias declaraciones, su intención era replantear la estrategia contra los cultivos ilícitos buscando más y mejores condiciones de sustitución y menos fumigaciones. Siendo así, al iniciar su gobierno buscó, por medio de varias visitas diplomáticas a los Estados Unidos, que éstos junto con otros países, le dieran el dinero para realizar un “Plan Marshall”¹¹ que enfocaría sus esfuerzos en la sustitución. Esto no funcionó y a finales de año se terminan discutiendo altas cifras de dinero (mucho más de lo aceptado para desarrollo socioeconómico) para colaborar con las fumigaciones del año siguiente.

TABLA 1 ¹²

Asistencia de Estados Unidos (1997-2002)			
(Cifras en millones de dólares)			
	AYUDA MILITAR	AYUDA SOCIOECONOMICA	TOTAL
1997	88,56		88,56
1998	112,44	0,52	112,96
1999	308,81	8,75	317,56
2000	785,56	212	997,56
2001	220,15	5,65	225,8
2002	371,74	120,3	492,04

La idea era hacer una estrategia de erradicación que complementara su política de paz; sin embargo eso tuvo varios obstáculos. El obstáculo más grande se presentó en Estados Unidos donde no estaban dispuestos a suspender las fumigaciones en Colombia, lo cual se reflejó por un lado en las críticas hechas al gobierno después de que el presidente Pastrana insinuó un cambio radical de estrategia, y por el otro en las reservas que manifestaron en relación con la zona de distensión; los cinco municipios de Caquetá despejados para el proceso de paz con las FARC-EP, en donde no se iba a fumigar hasta que los diálogos concluyeran.

En diciembre del 98, en una reunión hecha en Costa Rica entre representantes de las FARC, el gobierno estadounidense y el gobierno colombiano, el grupo guerrillero planteó una primera proposición para sustituir cultivos ilícitos. Dicha idea se refinó a lo largo de 1999 de la siguiente manera: en abril, Manuel Marulanda Vélez¹³ hace la propuesta de desmilitarizar un municipio, que posteriormente se concretará en Cartagena del Chairá, e

¹⁰ Pastrana dispuesto a enterrar el 94, "voy a sentarme en la mesa de Diálogo". El Tiempo. Febrero 21 de 1998. Pg 3A

¹¹ Éste después se convertiría en el Plan Colombia.

¹² Tabla tomada de [www.ciponline.org/U_S_Aid to Colombia Since 1997 Summary Tables.htm](http://www.ciponline.org/U_S_Aid%20to%20Colombia%20Since%201997%20Summary%20Tables.htm)

implantar allí un programa piloto de sustitución bajo la dirección guerrillera. Esta idea es vista con escepticismo por parte del gobierno y los Estados Unidos, quienes no están tan seguros de desmilitarizar más terreno. Las Naciones Unidas, aunque no están del todo convencidas, en octubre de ese año le dan su aval a la proposición siempre y cuando se haga bajo supervisión del gobierno.

Entre 1999 y 2000, la propuesta se refina en cuanto a dinero, metodología y resultados. Sin embargo, en julio de ese último año el gobierno dice que no puede despejar más territorio, dejando la opción de implementar el programa en los municipios que ya tienen o en su defecto intercambiar dos de ellos. Esto pone fin a la proposición. No obstante en la zona de distensión sí se inicia un proyecto de sustitución (marzo de 1999), dirigido principalmente por la ONU, con ayuda del Plante.

Ese año, a pesar de la intensificación de las fumigaciones, hay un aumento del área cultivada con matas de coca, que genera varias reacciones. Por un lado, debido a que éste es mayormente en las zonas controladas por la guerrilla y los paramilitares, quienes sacan ciertas ganancias del narcotráfico (impuestos a los cultivos y a la comercialización de la pasta de coca / amapola), se hace más fuerte la asociación de estos grupos y el mismo, especialmente las FARC-EP que, debido al proceso de paz, se encontraban bajo lupa. Esa unión se convertirá en la pieza angular para la militarización de la lucha antidrogas que se manifiesta inicialmente con la inauguración del Batallón Antinarcóticos en Tolomaida el 14 de agosto de 1999, y la propuesta del Plan Colombia en el mismo año

Con el tiempo, gracias a esa conexión, los grupos subversivos y paraestatales serán vistos y tratados como traficantes de drogas. Sus fuentes de ingreso serán reducidas por el gobierno nacional y estadounidense a las obtenidas por dicha actividad, justificando así, en aras a una debilitación de los mismos tanto en los diálogos como fuera de ellos, una intensificación aún mayor de las fumigaciones. Esto no sólo simplifica su naturaleza sino que permite la confusión entre dos problemas diferentes con soluciones distintas

Paralelamente al aumento de la fumigaciones aumentan las quejas por los daños de las mismas (muerte de animales, cultivos de pancoger y enfermedades). Éstas sin embargo no tienen impacto alguno y a pesar de que, se publican denuncias, se escriben secciones

¹³ Jefe de las FARC-EP

especiales explicando los riesgos y posibles daños de dicha actividad, se redactan columnas de críticas y hasta editoriales¹⁴, no trascienden.

En éste contexto el Plan Colombia, que queda para aprobar en el 2000 y cuyo eje central es la lucha contra el narcotráfico por medio de la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos, causa un gran revuelo entre organizaciones no gubernamentales, académicos y ambientalistas. A lo largo de este año se le van a hacer varias críticas, argumentando entre otras cosas, el daño que puede causar el aumento de las aspersiones a ecosistemas frágiles como el del Amazonas, la Orinoquía y el Macizo Colombiano (donde se ubican la mayor parte de los cultivos), el daño a plantas lícitas, animales e inclusive seres humanos, el desplazamiento que causaría¹⁵ y finalmente su poca efectividad.

Esto último es muy importante puesto que hace parte clave de la contrapropuesta a la aspersión aérea. Como se explicó inicialmente gran parte de los cultivadores ilícitos son campesinos e indígenas que no tienen otras opciones de subsistencia. A pesar de que se supone que a ellos no les llegan las fumigaciones, éstas son muy difíciles de controlar bajo las características, geográficas, climáticas y de orden público de nuestro país. Por ésta razón, ellos y sus cultivos lícitos o ilícitos, salen afectados, siendo necesario sembrar el doble de coca para reponer lo perdido.

Inclusive si así no fuera, los bajos costos en la fase de siembra y cosecha de las plantas hacen que la fumigación de las mismas no signifique una gran pérdida; éstas pueden ser reemplazadas con una inversión mayor, que tampoco implica un gran gasto (“...la coca representa menos el 1% del precio callejero de la cocaína en los Estados Unidos y en Europa”¹⁶) Esto significa más talas y quemas, junto con otros daños que vienen con la siembra y el procesamiento de cultivos ilícitos, expandiendo así la frontera agrícola a costa de nuestra biodiversidad y la de la región. Las fumigaciones aceleran ese proceso al dañar los terrenos ya afectados por los cultivos, para que exista la necesidad de utilizar nuevos más adentro en la selva.

¹⁴ Éstas aparecen especialmente en El Espectador.

¹⁵ Parte de ese desplazamiento forzoso del Plan es inclusive admitido por ambos gobiernos, que destinan un rubro en un intento por subsanar la situación.

¹⁶ Thoumi, Francisco E. El imperio dela droga, narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Bogotá: Ed. Planeta, Septiembre de 2002 Pg. 364.

Las críticas aumentaron cuando se desató la discusión, a mediados del 2000, acerca de la posible experimentación y posterior uso del *Fusarium Oxyporum*¹⁷ en territorio colombiano. La propuesta salió inicialmente de la Universidad de Princeton en febrero del mismo año, y fue transmitida posteriormente por el Departamento de Estado Norteamericano a Colombia. La idea era hacer una investigación patrocinada por la UNDCP¹⁸ y los Estados Unidos, en la que Colombia aportaría el territorio, y los gastos de mantenimiento, transporte y seguridad de equipos.

Las quejas contra el hongo de un amplio sector de la opinión pública con que se encontraron ambos gobiernos y la UNDCP, aún antes de que Colombia aceptara, se basaron en lo peligroso que podría resultar el experimento, y su eventual implementación, debido más que todo la imposibilidad de predecir sus efectos, o controlarlos dado el caso. Se afirmó, que el hongo carecía de un estudio cuidadoso que permitiera su prueba en campo abierto, puesto que todavía no se habían determinado sus efectos reales en otros cultivos, la salud humana y animal o su capacidad de mutación. Por otra parte, como lo hizo ver la Defensoría del Pueblo, junto con otros organismos, existen 250 familiares de la planta de coca, que son hábitat vital de varias especies importantes para la preservación del ecosistema; éstos también se verían afectados

En julio de ese año, el Ministerio del Medio Ambiente negó la licencia para dicho experimento, abriendo, una nueva para investigar agentes “nacionales”. Paulatinamente tanto el gobierno de Estados Unidos, como la UNDCP, se retiraron del primer proyecto, y poco después, en enero del siguiente año, Colombia canceló el segundo.

Las quejas contra el famoso hongo, inclusive el “nacional”, estuvieron acompañadas a lo largo del 2000 por otras similares sobre daños a las comunidades, incluyendo las ecuatorianas, a las que se añadieron denuncias por el uso de químicos prohibidos, como el Imazapyr¹⁹ y el Tebuthiurón²⁰ y el descuido durante la aspersion (violación de normas técnicas, falta de supervisión y falta de verificación)²¹. Vale la pena aclarar que además de que no existen los estudios pertinentes para evaluar las reacciones de los diferentes químicos en el ecosistema y así verificar la veracidad de dichas acusaciones, la responsabilidad de vigilar el proceso de fumigación parece no ser de nadie. El ministerio

¹⁷ Hongo propuesto como agente biológico de erradicación de plantas de coca.

¹⁸ Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas

¹⁹ Denuncian uso de Imazapyr. El Espectador. Junio 7 de 2000. Pg 6A.

²⁰ Alerta por hongo contra la coca. El Tiempo. Marzo 6 del 2000. Pg 12A

²¹ Los vacíos de la fumigación. El Tiempo. Mayo 5 de 2000. Pg 1-22

del Medio Ambiente dice que ésta es de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que a su vez se la achaca al Ministerio del Interior y así cíclicamente.

A estas inconsistencias se sumaron las diferencias en las metas de erradicación del Plan Colombia; mientras la copia colombiana afirmaba que era el 50% de los cultivos en cinco años, la copia norteamericana constataba que era el 100% en seis; posteriormente se centraría la cifra en el 50% en cinco años.

A pesar de todo lo anterior, las fumigaciones continuaron principalmente en Putumayo, como lo indicaba la primera fase de erradicación del Plan Colombia; allí también se desarrollaron los primeros pactos de erradicación manual²² patrocinados por el mismo. Durante ese año inician también las aspersiones en Norte de Santander.

Los resultados del Plan Colombia a lo largo del 2001 no presentaron un panorama muy alentador. En cuanto a la erradicación de los cultivos de coca, las cifras fueron claras: a pesar de las fumigaciones y los pocos pactos de erradicación, éstos habían aumentado notablemente a lo largo y ancho del país²³. A eso se añadieron, además de las tradicionales quejas por las fumigaciones, acusaciones e investigaciones de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación acerca de daños e irregularidades con el uso de los químicos y el dinero. También se denunció la aspersión aérea sobre lugares bajo la protección de los pactos.

A los escándalos ocasionados por dichas acusaciones se unen la tutela impuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, los disturbios ocasionados en Tibú (Norte de Santander) durante una marcha cocalera y la gira mundial de algunos gobernadores colombianos en busca de apoyo a su Plan Surcolombiano²⁴. Ante eso el Ministerio del Medio Ambiente contrata una veeduría externa para las fumigaciones y el senado estadounidense ordena al Departamento de Estado dar un informe acerca de las actividades de erradicación, condicionando así el paquete de ayuda para el 2002.

²² Tratos entre el gobierno y las familias afectadas por los cultivos en los que ellas se comprometen a reemplazar sus cultivos ilícitos por plantas lícitas financiados por el Estado en un tiempo acordado por ambos actores, no mayor a un año, durante el cual las familias deben recibir un subsidio con el cual sostenerse mientras se pueden cosechar los nuevos cultivos.

²³ Pasaron de ser 160.119 hectáreas a ser 163.289.

²⁴ Plan alternativo al Plan Colombia, que busca, entre otras cosas, la suspensión de las fumigaciones y apoyo a sus planes de desarrollo alternativo.

A pesar de eso las quejas por aspersiones aéreas con glifosato continúan. y la implementación de la segunda fase de fumigación del Plan Colombia en el Sur de Bolívar empieza tal y como estaba previsto.

También durante este año aumentaron y se diversificaron los planes de desarrollo alternativo, lo que no significó que mejorara su desempeño, puesto que si bien se consiguen más proyectos y dinero para los mismos, y se firman más pactos, también aparecen más denuncias por fumigaciones en hectáreas que se encuentran bajo la protección de éstos. El gobierno, que admite varias de ellas, afirma que los campesinos que pactan no cumplen con la erradicación y siembran, o no tumban, sus matas de coca o amapola mientras se aprovechan de los subsidios otorgados por el Estado. Éstos últimos contraargumentan que el dinero de los pactos no les llega, y deben volver a sembrar cultivos ilícitos, o guardar algunas matas, para subsistir.

Lo que muestran varios reportes tanto en El Tiempo como en El Espectador es una gran demora en el desembolso del dinero para desarrollo alternativo, que por cierto es significativamente menor al destinado a las operaciones de fumigación (Ver Tabla 1)

Los reportes acerca de las actividades de erradicación generan un nuevo problema; mientras la CIA afirma que los cultivos crecieron en un 30%, el Departamento de Estado dice que se estabilizaron. Esa aseveración, coincide con los datos presentados por las Naciones Unidas y la Policía Antinarcóticos colombiana que calculan el aumento de las plantaciones de coca en 144.800 hectáreas.

Basado en esa información Estados Unidos, señala la necesidad de una intensificación de la estrategia, y exige un cambio en la política de sustitución debido a las fallas ocurridas el año pasado. Siguiendo esa directriz, el gobierno colombiano, a lo largo del 2002, no sólo extiende las fumigaciones a nuevas zonas, incluyendo sectores donde se había pactado, sino que las aumenta e intensifica. Inclusive se prueba una nueva mezcla de Glifosato²⁵ que busca ser más fuerte.

²⁵ Vale la pena aclarar que el Glifosato a lo largo de todos estos años ha sido constantemente modificado con otras sustancias para aumentar su efectividad. Esto por supuesto ha generado varias críticas, de aquellas personas que consideran que los estudios hechos para su aprobación, no toman en cuenta los cambios que producen esas nuevas sustancias.

Los pactos de erradicación también sufren modificaciones: ahora campesinos e indígenas deben destruir todas las matas de coca o amapola para poder recibir un primer desembolso por parte del Estado. Esto deja a los cultivadores sin alternativa: si pactan y el gobierno no desembolsa rápido o fumiga los nuevos proyectos, lo cual ha sucedido ya varias veces, se quedan sin sustento. Si no lo hacen, y el gobierno de todas formas fumiga, igual se quedan sin sustento.

Este cambio de actitud, tiene otros antecedentes; además de la radicalización del gobierno norteamericano, se encuentra el fin del proceso de paz, con la consecuente intensificación de la guerra y la posesión de Álvaro Uribe Vélez , con su política de “mano dura”, como presidente en agosto del 2002.

Nuevamente se ven denuncias por las fumigaciones, el mal manejo de los químicos y el incumplimiento de normas ambientales, que van unidas a amenazas de marchas y bloqueos por parte de los cultivadores y exigencias de ONG's y organismos como la Defensoría del Pueblo, de suspender las aspersiones. Estas al igual que en años anteriores, no tienen repercusión alguna.

Adicionalmente en una nueva evaluación del Plan Colombia a mediados de éste año, la Contraloría General de la Nación revela, con más detalles que en otras ocasiones, la investigación de irregularidades en el manejo de los dineros para el desarrollo alternativo²⁶; según informa El Tiempo en un especial de junio²⁷, las ONG's encargadas de distribuir los rubros destinados a los proyectos de sustitución, son investigadas por anomalías en el manejo de los mismos.

En éste año, se presenta también el informe del Departamento de Estado norteamericano, en donde se le asegura al congreso del mismo país, que el herbicida es inofensivo para animales terrestres y humanos (exceptuando una pequeña irritación en los ojos). Asevera que la erosión que causa es mínima permitiendo a las plantas crecer nuevamente en poco tiempo puesto que sólo permanece por un período largo en el agua. También afirma que los parámetros de fumigación, desde la preparación del químico hasta la aspersión misma, son seguros y se realizan evitando hacer mayor daño al medio ambiente²⁸.

²⁶ A las que se suman denuncias por el mal manejo de los químicos asperjados e incautados, el retraso en las ayudas económicas del Plante, falta de coordinación entre las entidades encargadas de la erradicación y la falta de control ambiental sobre las fumigaciones entre otras.

²⁷ ONG están en la mira. El Tiempo. Junio 9 de 2002. Pg 1-17

²⁸ "Informe sobre el Glifosato". Notas Actuales. Boletín de la Embajada de Estados Unidos. No. 3. Septiembre de 2002.

El informe es bastante criticado por diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Éstas afirman, que se hizo sin tener en cuenta la especificidad del ecosistema en que se utiliza y la diferencia que hay entre el Glifosato y la mezcla con la que realmente se fumiga, a la cual se le han añadido otros químicos adicionales. No obstante es suficiente para el congreso norteamericano que autoriza la ayuda condicionada al mismo.

En el plano del desarrollo alternativo es poco lo que se hace; a lo largo del segundo semestre de éste año, Uribe busca consolidar un programa en el que se cambiarían bosques por cultivos. Y aunque es presumible, que se siguieron haciendo obras de infraestructura, sin embargo, es poco lo que se dice al respecto. De cualquier forma las quejas por falta de recursos necesarios persisten, lo que permite deducir que si bien se siguieron haciendo trabajos, éstos no fueron suficientes, o se hicieron en otros lugares.

Así, el 2002 termina con un aumento sustancial en las fumigaciones (desde agosto hasta diciembre de ese año, se fumigan 64.000 hts)²⁹; la política del nuevo gobierno, cuya bandera es la seguridad del país, consiste en acabar lo más rápido posible con los cultivos, para eliminar la fuente de financiación de la guerrilla y así poder vencerla.

Durante la primera mitad del 2003 la situación no será diferente; en medio de críticas y denuncias las fumigaciones permanecerán igual al año anterior. Esta vez, sin embargo, los resultados van a ser diferentes; aparentemente hay una disminución de los cultivos en Colombia, lo que sin embargo matizan recientes reportes en los que se anuncia la aparición de nuevos cultivos en países fronterizos.

CONCLUSIONES

Como se puede ver a lo largo de este trabajo, las políticas de erradicación de cultivos ilícitos han sido construidas a partir de situaciones coyunturales que obedecen a factores políticos, económicos, sociales y culturales tanto nacionales como internacionales. A lo largo del período evaluado ha sido especialmente evidente la carencia de una visión global que examine realmente cuáles son las características del negocio y las ataque en consecuencia.

²⁹ E.U. Replantaría estrategia si fumigaciones fracasan. El Tiempo. Diciembre 5 de 2002. Pg, 1-2

Más que una estrategia efectiva en contra de las drogas, los parámetros de construcción de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos han respondido a la presión de Estados Unidos, cuyo gobierno está interesado en disminuir el consumo interno del país, o en su defecto, mostrar medidas visibles (la prevención no lo es) que aseguren las elecciones del partido de turno.

En un contexto de ilegitimidad estatal a nivel interno y externo, como el que tuvo que enfrentar Andrés Pastrana al inicio de su administración, el mejoramiento de las relaciones bilaterales con el gobierno norteamericano eran la única opción; de ello dependía no sólo una serie de dineros necesarios para desarrollar su plan de gobierno, sino su imagen a nivel nacional. Dentro de este marco no cabía un cambio de estrategia en lo referente a los cultivos ilícitos; las fumigaciones debían continuar como lo aseguró el Plan Colombia, que no sólo las patrocina, sino que condiciona otros rubros importantes a las mismas.

Dentro del proceso de paz con las FARC-EP esto tampoco era una buena idea. La unión del grupo guerrillero con las ganancias del narcotráfico y la creencia de que de allí se deriva su fuerza, se cristalizaron a lo largo de esos cuatro años; la ausencia de acciones evidentes para la eliminación de los cultivos sumado al fracaso mismo de los diálogos lo convirtieron en un cartel de la droga a los ojos del mundo. El fin de los cultivos ilícitos ya no era sólo un paso para acabar con el narcotráfico; también se convirtió en una estrategia militar para vencer al grupo subversivo tal y como se plantea hoy en día.

Y mientras las políticas de erradicación de cultivos ilícitos se mueven hacia donde mejor convenga de acuerdo a las condiciones del momento, se han ignorado factores claves del problema en Colombia. Se han desconocido las denuncias de la población acerca de los daños que producen las fumigaciones y las fallas que tiene el desarrollo alternativo tal y como está planteado hoy en día. Se han evadido cientos de estudios acerca del problema del narcotráfico, que además de reproducir las quejas de las comunidades afectadas por los cultivos, aseguran que la estrategia es ineficaz para acabar con el negocio y dan posibles soluciones que, como la reforma agraria, se han evitado por años.

BIBLIOGRAFÍA

1. PERIÓDICOS

- ?? El Espectador (1998-2002)
- ?? El Tiempo (1998-2002)

2. LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS

- ?? Camacho G, Álvaro, Andrés López R y Francisco E. Thoumi. 1999. Las drogas: una guerra fallida. Bogotá: Tercer Mundo Editores – Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Marzo 1999.
- ?? Camacho G, Álvaro. “Narcotráfico y paz: alternativas y políticas”, en Álvaro Camacho G y Francisco Leal B (ed.), Armar la paz es desarmar la guerra. Cerec, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Fundación Friedrich Ebert de Colombia (Fescol), Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Misión Social y Presidencia de la República/ Alto Comisionado Para la Paz. Bogotá: Giro Editores Ltda, 2000
- ?? Castro C, José Fernando. Los cultivos ilícitos, política mundial y realidad en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2000.
- ?? Center of International Policies: Colombia's project. www.ciponline.org/colombia. Visitada en Mayo 3 de 2003.
- ?? Dirección Nacional de Estupeficientes. Plan Nacional de lucha contra las drogas: Colombia 1998-2002. Bogotá: Dirección Nacional de Estupeficientes 2000.
- ?? “Fumigar, fumigar y fumigar: la importancia de los debates sobre el pasado y el futuro del Plan Colombia”. Actualidad Colombiana. Vol. 14, No 348 (Octubre 30 – Noviembre 6 del 2002).
- ?? García V, Mery Constanza y Nubia Esperanza Mejía G. “El impacto de las fumigaciones aéreas”, en Jairo Estrada (ed), Plan Colombia, ensayos críticos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia., Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 2001.
- ?? Hans Seidel Stiftung, PNUD, Senado de la República. ¿Cómo hacer el desarrollo alternativo una estrategia viable y eficaz en la lucha contra las drogas?: Memorias Foro Desarrollo Alternativo en Países Andinos (Mayo 24-25 de 2001, Bogotá). Bogotá: Imprenta Nacional, 2001.
- ?? Molano, Alfredo. “Medio ambiente, cultivos ilícitos y guerra”. Revista Número. No. 25 (Marzo-Mayo 2000).
- ?? Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Oficina en Colombia). www.undcp.org/colombia/index.html. Visitado en Mayo 3 de 2003.
- ?? Plan Nacional de Desarrollo Alternativo. www.desarrolloalternativo.gov.co. Visitado en Mayo 3 de 2003.
- ?? Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo Alternativo – Plante: logros y perspectivas. Bogotá: Presidencia de la República, Marzo de 2002
- ?? Presidencia de la República. La lucha de Colombia contra las drogas: acciones y resultados 2001. Bogotá : Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección Nacional de Estupeficientes, 2002.
- ?? Ramírez, Socorro. “La internacionalización del conflicto y de la paz en Colombia” en Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto. Bogotá: Ed. Planeta, 2001
- ?? Thoumi, Francisco E. El imperio dela droga, narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Bogotá: Ed. Planeta, Septiembre de 2002.

- ?? Tickner, Arlene B. "La "guerra contra las drogas": las relaciones Colombia – Estados Unidos durante la administración Pastrana", en Jairo Estrada (ed) Plan Colombia, ensayos críticos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia., Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 2001.
- ?? Tickner, Arlene B. "Tensiones y contradicciones en los objetivos de la política exterior estadounidense en Colombia: consecuencias involuntarias de la política antinarcóticos de Estados Unidos en un estado débil", Colombia Internacional, Nos 49 – 50, Mayo-Diciembre de 2000.
- ?? Tokatlian, Juan Gabriel. "Política antidrogas de Estados Unidos y cultivos ilícitos en Colombia". Análisis Político, Instituto de Estudios Políticos y relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. No 35, Septiembre-Diciembre 1998.
- ?? Universidad de los Andes, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y Fundación Compartir. Cultivos ilícitos en Colombia: memorias del foro realizado el 17 y 18 de Agosto de 2000 en la Universidad de los Andes. Bogotá: Ediciones Uniandes - Corca Editores, 2001
- ?? Vargas M, Ricardo. "Cultivos ilícitos, conflicto y proceso de paz" en Jairo Estrada (ed) Plan Colombia, Ensayos Críticos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 2001
- ?? Seminario de "Evaluación de pactos de erradicación manual de cultivos de coca en el Putumayo" y "La política de desarrollo alternativo en Colombia y sus perspectivas". Junio 25-26 de 2001.